



PAGINA WEB

DENTRO DE LA CAUSA 575-2011-TCE; SE HA DISPUESTO LO QUE HA CONTINUACIÓN ME PERMITO TRANSCRIBIR:

SENTENCIA

CAUSA 575-2011-TCE

TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL. - Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, miércoles 07 de marzo de 2012, las 18H30. Agréguese al expediente, el memorando número 022-2012-VP-TCE, dirigido a la Doctora Ximena Endara Osejo; Presidenta del Tribunal Contencioso Electoral; mediante el cual la Dra. Amanda Páez Moreno Jueza Vicepresidenta del Tribunal Contencioso Electoral, solicita licencia , con cargo a vacaciones entre los días lunes 05 al jueves 08 de marzo de 2012 ; el oficio N.0 026-2012-SG-TCE; suscrito por el abogado Fabián Haro Aspiazú, Secretario General del Tribunal Contencioso Electoral, mediante el cual comunica a la Dra. Nelly Cevallos Borja jueza suplente del Tribunal Contencioso Electoral, el reemplazo en actividades administrativas y jurisdiccionales a la Doctora Amanda Páez Moreno; jueza principal del Tribunal Contencioso Electoral, en razón que hará uso de una licencia con cargo a vacaciones entre los días lunes 05 de marzo de 2012, a jueves 08 de marzo de 2012. - **VISTOS:** A la suscrita Jueza le correspondió el conocimiento de la causa signada con el No. 575-2011-TCE, que contiene entre otros documentos, un Parte Policial y la Boleta Informativa del Tribunal Contencioso Electoral No. BI-033954-2011-TCE, instrumentos de cuyo contenido se encuentra una supuesta infracción electoral presuntamente cometida por el señor Mauro Agustín Pérez Pita; el día sábado siete de mayo de dos mil once, a las catorce horas, en la ciudad de Milagro provincia del Guayas, la cual estaría prevista en el artículo 291 numeral 3 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia que dice: "Se sancionará con multa equivalente al cincuenta por ciento de una remuneración mensual básica unificada a: (...) 3. Quien expenda o consuma bebidas alcohólicas en los días en que exista prohibición de expendio o consumo de tales bebidas.".- Al respecto, se realizan las siguientes consideraciones:

PRIMERO: JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.-

a) Por mandato que consta en los artículos 217 inciso segundo y 221 numeral 2, que se encuentran en el Capítulo sexto, "Función Electoral", en concordancia con los artículos 167 y 168, insertos en los "Principios de la Administración de Justicia", de la

Constitución de la República del Ecuador de 2008, el Tribunal Contencioso Electoral tiene jurisdicción para administrar justicia en materia electoral, siendo sus fallos de última instancia; así también para sancionar por incumplimiento de las normas sobre financiamiento, propaganda, gasto electoral y en general por vulneraciones de normas electorales;

b) Por disposición de los artículos 61 numeral 4 y 106 de la Constitución de la República, en concordancia con el artículo 25 numeral 2 y 195 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia, el Consejo Nacional Electoral convocó para el día 07 de mayo de 2011 a Referéndum y Consulta Popular.

c) El artículo 72 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia, establece que el juzgamiento de las infracciones electorales corresponde, en primera instancia, a una de las juezas o jueces por sorteo para cada proceso, y la segunda instancia al Pleno del Tribunal Contencioso Electoral.

d) El procedimiento aplicable a la presente causa, es el previsto en los artículos 249 y siguientes de la Sección Segunda "Juzgamiento y Garantías" del Código de la Democracia para el juzgamiento de las infracciones electorales, en concordancia con los artículos 84 al 88 del Reglamento de Trámites Contencioso Electorales del Tribunal Contencioso Electoral, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No.412 de jueves 24 de marzo del 2011, señala el procedimiento a seguir por parte de las juezas y jueces de este Tribunal, para el juzgamiento de las infracciones electorales. Al haberse sustanciado la presente causa de conformidad a la normativa constitucional y legal vigente a la fecha del cometimiento de la presunta infracción, no adolece de nulidad alguna, por lo que se declara su validez.

Con sujeción a las disposiciones constitucionales y legales referidas, queda asegurada la jurisdicción y competencia de este Tribunal y de esta Jueza, así como el procedimiento previsto para el presente trámite, sin que se observe nulidad alguna que lo afecte, por lo que se acepta a trámite la presente causa.

SEGUNDO: ANTECEDENTES.-

a) Con fecha diez y ocho de mayo de dos mil once, a las 15h:11, ingresa a este órgano de justicia electoral la presunta infracción en contra del ciudadano Mauro Agustín Pérez Pita; en un Parte informativo y una Boleta informativa, que conforman dos fojas útiles, acorde a la razón sentada por el Ab. Fabián Haro Aspiazu, Secretario General del Tribunal Contencioso Electoral (fojas 3).



- b)** En el parte policial suscrito por el señor cabo segundo de Policía Luis Medina Lemos, aparece que el agente procedió a entregar la Boleta Informativa No. BI-033954-2011-TCE al ciudadano de nombres Mauro Agustín Pérez Pita, por infringir el numeral 3 del artículo 291 del Código de la Democracia (foja 1).
- c)** El diez y ocho de mayo de dos mil once, el Secretario General del Tribunal Contencioso Electoral, procede a sortear la causa correspondiendo el conocimiento a la Jueza Dra. Tania Arias Manzano (fojas 3).
- d)** El treinta de enero de de dos mil doce, a las 12h:00, la suscrita Jueza Dra. Amanda Páez Moreno, quien se incorporó a este Tribunal Contencioso Electoral, en calidad de Jueza principal por renuncia de la Dra. Tania Arias, de acuerdo con la Resolución del Pleno de PLE-TCE-740-01-08-2011, avoca conocimiento de la presente causa, ordenando la citación al presunto infractor Mauro Agustín Pérez Pita, en el domicilio ubicado en el cantón Yaguachi, en las calles Cone y Sucre; señalando para el día miércoles siete de marzo de 2012, a las 12h30, para que comparezca a la realización de la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento (fojas 5).
- e)** Providencia de fecha 29 enero de 2011, a las 11H05, en la cual se nombra al Ab. Paúl Mena Zapata como Secretario Relator Ad-Hoc dentro de la sustanciación de la presente causa (fojas 4).
- f)** Las razones de notificación del Ab. Paúl Mena Zapata, Secretario Relator ad- hoc de este despacho, que da fe del cumplimiento de las notificaciones, las publicaciones y demás actuaciones procesales dentro de la sustanciación del presente caso (fojas 6).
- g)** La razón de citación suscrita por el Ab. Milton Andrés Paredes Paredes, Citador-Notificador, mediante la cual certifica haber citado por interpuesta persona al señor Mauro Agustín Pérez Pita (Foja 7)
- h)** Acta de la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento (Fojas.08, 09)
- l)** Copia certificada de las cédulas de identidad de las partes procesales (Fojas 10,11)
- j)** Documento identificado como certificado médico de fecha 03 de marzo de 2012, emitido por el Doctor Edison Cano Jácome, medico gastroenterólogo, que contiene el resultado de la endoscopia alta del señor Mauro Pérez Pita.

TERCERO: GARANTÍAS DEL DEBIDO PROCESO.-

Se da cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 11, 76 y 168 de la Constitución de la República del Ecuador que determinan las garantías básicas para asegurar el derecho al debido proceso, en concordancia con el artículo 72 primer inciso del Código de la Democracia, el cual establece: “Las causas contencioso electorales sometidas al juzgamiento del Tribunal seguirán los principios de transparencia, publicidad, inmediación, simplificación, oralidad, uniformidad, eficacia, celeridad y economía procesal, y en ellas se observarán las garantías del debido proceso”; en cuyo cumplimiento se realizaron las siguientes diligencias: citación al presunto infractor, haciéndole conocer que debe designar un abogado defensor, y en caso de no tener, se le designa un defensor público, como indica el artículo 76 numeral 2 de la Constitución de la República, que en su parte pertinente ordena lo siguiente: “En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso, que incluirá las siguientes garantías básicas: (...) 7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento. (...) g) En procedimientos judiciales a ser asistido por una abogada o abogado de su elección o por defensora o defensor público; no podrá restringirse el acceso ni la comunicación libre y privada con su defensora o defensor.”

CUARTO: IDENTIDAD DEL PRESUNTO INFRACTOR.-

De acuerdo con la Boleta Informativa No. BI-33954-2011-TCE, de fecha sábado 07 de mayo de 2011, a las 14H00, el presunto infractor que se identificó con el nombre de Mauro Pérez Pita ha recibido y firmado la Boleta Informativa.

QUINTO: CARGO QUE SE FORMULA EN CONTRA DEL PRESUNTO INFRACTOR.-

De conformidad con el parte policial y la boleta informativa suscritas por el agente de policía Luis Medina Lemos, se presume la comisión de la infracción prevista en el artículo 291 numeral 3 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia; que dice: “Se sancionará con multa equivalente al cincuenta por ciento de una remuneración mensual básica unificada a: (...) 3. Quien expendia o consuma bebidas alcohólicas en los días en que exista prohibición de expendio o consumo de tales bebidas.”

SEXTO: AUDIENCIA ORAL DE PRUEBA Y JUZGAMIENTO.-

La Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento se realizó en la ciudad de Guayaquil, capital de la provincia de Guayas, hoy miércoles 07 de marzo de dos mil doce a las 12h38, se instaló el presente juzgamiento, habiendo comparecido el señor Mauro



Agustín Pérez Pita, en compañía de su abogada defensora Julieta Navarro Alvarado, con matrícula profesional número 6917 del colegio de Abogados de la Provincia del Guayas y el señor Cabo Segundo de policía Luis Medina Lemos, portador de la cédula de ciudadanía 0801919838, responsable de la emisión de la boleta informativa número 033954-2011-TCE.

SÉPTIMO: ANÁLISIS DE HECHO Y DE DERECHO.-

a) Principio de Juez Natural

Es un derecho fundamental que asiste a todos los sujetos a ser juzgados por un órgano creado conforme a lo prescrito por la Ley Orgánica correspondiente dentro del ámbito de la jurisdicción ordinaria, respetando los principios constitucionales de igualdad, independencia, imparcialidad y sumisión a la ley; constituyéndose además, con arreglo a las normas comunes de competencia preestablecidos.

En virtud a esta garantía procesal, se determina que el juez y el procedimiento deben preexistir al delito y al proceso, no siendo permitidos los Tribunales post-facto así como los juzgamientos por comisión o por delegación, pues su existencia permite inferir que en ciertos casos no actuarán con independencia, ecuanimidad y la imparcialidad que exige el cargo, pudiendo por tales circunstancias asumirse una actitud prejuiciada en torno al caso concreto.

Héctor Fix Zamudio afirma que el principio del derecho de los justiciables al juez natural o competente tiene un doble significado: por una parte indica la supresión de los tribunales de excepción y por otra, establece la prohibición de que una persona sea sustraída del juez competente para ser sometida a un tribunal diverso, generalmente militar; en este orden de ideas, el numeral 1) del Artículo 8º de la Convención Americana de Derechos Humanos sanciona como garantía judicial que “toda persona tiene derecho a ser oída por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustentación de cualquier acusación penal formulada contra ella”.

Es necesario señalar que el principio de inmediación procesal está referido a la relación entre el juez y el objeto procesal, lo que significa que la actividad probatoria ha de transcurrir ante la presencia o intervención del juez encargado de pronunciar la sentencia; de este modo la sentencia se forma exclusivamente sobre el material probatorio formado bajo su directa intervención en el juicio oral.

Por su parte, cabe precisar que la garantía del juez natural constituye a decir de Luigi Ferrajoli una de las garantías orgánicas del debido proceso, asimismo, en su calificación, son garantías de libertad y de verdad.

Al respecto, es entendible la designación de jueces para determinadas áreas a los que se les asigna una carga equitativa; sin embargo, no debemos soslayar que lo más idóneo para una mejor administración de justicia es que aquel juzgador que conoce y asume competencia desde un inicio respecto a determinado proceso, que ha valorado con criterio de conciencia y objetividad los elementos probatorios sometidos a su conocimiento, sea también aquel que emita fallo final.

Así mismo La Jurisdicción y Competencia de este Tribunal y de esta Jueza quedan aseguradas, al amparo de la normativa legal vigente a la fecha de cometimiento de la presunta infracción electoral y del procedimiento previsto en la ley.

b) Respecto de la versión de los hechos que ha dado el señor cabo segundo de Policía Luis Medina Lemos, quien manifestó lo siguiente: "Me ratifico en el contenido del parte policial y boleta informativa, así mismo reconozco mi firma y rubrica que constan en estos documentos y no tengo nada más que agregar".- Al respecto esta jueza considera que el hecho de la materialidad de la acción que configura los preceptos procesales de una presunta infracción en materia electoral deben contener ciertos requisitos o condiciones que se precisan para que una infracción sea calificada como tal, en consecuencia debe cumplir con algunos preceptos, que son tres elementos sustanciales o constitutivos: de carácter general, de carácter constitutivo especial o de carácter constitutivo accidental, que den elementos al juzgador para determinar el nexo causal existente entre la infracción tipificada en la legislación y en los hechos suscitados, elementos que han sido manifestados y evidenciados por la parte sustanciadora de la presente acción. Tienen relación con la tipificación de la infracción electoral, y no describen un hecho concreto y real, que determine la existencia o no de una infracción de tipo electoral.- Respecto de la versión proporcionada por parte de la abogada Julieta Navarro Alvarado quien manifestó: "A nombre y representación de mi cliente tengo que indicar que, el día siete de mayo, luego de salir de mi trabajo, me dirigí a cumplir con mi obligación del sufragio y luego de sufragar, me fui a un local para encontrarme con un pariente con quién debía regresar a la casa , pero en ese momento, llega la Policía, nos piden la cédula de ciudadanía y nos trasladan hasta el UPC de Yaguachi en donde se nos entregó la boleta informativa; posterior a esto, me trasladé a la Delegación Provincial Electoral de la Provincia del Guayas creyendo que aquí debía pagar una multa. Continúa la intervención de la Abogada Defensora manifestando que su cliente no había bebido, por cuanto sufre de gastritis que le impide ingerir alcohol, por lo que ingresa como prueba, un certificado médico de fecha 03 de marzo de 2012, emitido por el Doctor Edison Cano Jácome, medico gastroenterólogo, que contiene el resultado de la endoscopia alta del señor Mauro Pérez Pita, en base a lo cual la Abogada solicita a la señora jueza, se absuelva a su cliente por ser inocente, dejando la carga de la prueba al señor Agente que elaboró la boleta informativa.-.



Respecto de la enunciación que realiza la defensa e introducción al expediente del certificado médico de fecha 03 de marzo de 2012, emitido por el Doctor Edison Cano, es mester remitirse a la patología de la enfermedad descrita como gastropatía inflamatoria leve, lo constituye un impedimento de tipo médico para el consumo de alcohol, como es de conocimiento general.- En consideración de los alegatos y la fundamentación del caso por parte de la abogada de la defensa es necesario remitirse, a las normas y garantías del debido proceso que es un derecho fundamental de protección, de obligatoria observancia como garantía procesal, que al encontrarse constitucionalmente fundado, preserva los principios de justicia, por ello, el art. 76 numeral 2 de la Constitución de la República, manda en su parte pertinente que: "En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso, que incluirá las siguientes garantías básicas:" (...) "2. Se presume la inocencia de toda persona y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada." La presunción de inocencia es un hecho real y objetivo que acompaña a la personalidad humana, es un estado jurídico como consecuencia de la norma, por ello, y según lo actuado en la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, **se presume la inocencia** del señor Mauro Agustín Pérez Pita; portador de la cédula de ciudadanía número 091212454-2

c) La presunción de inocencia obliga a la parte acusadora a demostrar el hecho culposo y encontrar la responsabilidad del procesado, a fin de que se pueda juzgar en derecho lo que corresponda, los medios probatorios en todo proceso deben respetar las normas del debido proceso, por ello, con apego al artículo 32 del Reglamento de Trámites Contencioso Electorales del Tribunal Contencioso Electoral, que determina: "El recurrente o accionante deberá probar los hechos que ha señalado afirmativamente en el proceso. El accionado, de ser el caso, no está obligado a producir prueba, a menos que su contestación contenga una afirmación implícita o explícita". El agente de policía no ha incorporado al expediente ninguna prueba, que de elementos a esta juzgadora que determinen la existencia de una infracción de tipo electoral por lo que se establece que no existe certeza en la acusación que se ha formulado al presunto infractor, ni prueba válida y concluyente de su parte, y con apego al art. 76 de la Constitución de la República, que ordena: "En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso, No basta una acusación o una mera presunción para que el acusado sea sancionado, ya que se encuentra garantizado con los principios del debido proceso, y principalmente con la presunción de inocencia, Por lo que no existe prueba determinante y concluyente de que el señor Mauro Agustín Pérez Pita se encuentra incurso en la infracción prevista en el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia.

DECISIÓN

Por las consideraciones expuestas, **ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA**, se dicta la siguiente sentencia:

- 1) Se declara sin lugar el presente juzgamiento y en consecuencia se ratifica la presunción de inocencia del ciudadano Mauro Manuel Pérez Pita de la cédula de ciudadanía número 091212454-2
- 2) Ejecutoriado que sea este fallo, archívese la causa.
- 3) Actúe en la presente causa el Abogado Paúl Mena Zapata, en su calidad de Secretario Relator Ad-Hoc.

**4) CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE. F) Dra Nelly Cevallos Borja JUEZA (S)
TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL**

Lo que comunico para los fines de ley

Ab. Paúl Mena Zapata

SECRETARIO RELATOR AD-HOC